

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



PRESENTADO POR:

JENNIFER PAOLA ARENAS FIGUEROA

PRESENTADO A:

**FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES ESTRATEGIA Y
SEGURIDAD**

DIRECTOR DEL PROGRAMA: CARLOS ANDRES PRADO

TUTOR: CAMILO ANDRÉS DEVIA GARZÓN

PROGRAMA: RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS

6/09/2021

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el departamento de Antioquia para alcanzar un mayor grado de desarrollo multidimensional?

Resumen

El objetivo del siguiente ensayo producto del diplomado llamado “Internacionalización y desarrollo local” es identificar y describir los mayores desafíos que ha tenido que enfrentar el departamento de Antioquia para desarrollar su potencial económico, social y cultural. Los desafíos propuestos para ser estudiados son los siguientes: 1. Las fallas institucionales y estructurales; 2. El conflicto armado; y 3. La pobreza multidimensional; Para efectos de este ensayo se optó por tomar como sujeto de análisis al departamento de Antioquia, puesto que a pesar de que ocupa el segundo lugar en participación del PIB Nacional, detrás de Bogotá, de acuerdo con las cifras del DANE, presenta profundas desigualdades, índices de pobreza altos y algunos otros fenómenos que afectan a las comunidades a lo largo y ancho de su territorio, lo que no les ha permitido alcanzar el potencial propicio para desarrollarse de manera multidimensional. Dichos fenómenos serán analizados a lo largo del documento, por medio de una revisión de prensa y de artículos académicos, además de la utilización de cifras, con el fin de darle un soporte argumentativo mayor a la pregunta inicialmente planteada. Se finalizará formulando unas propuestas, buscando responder a los desafíos expuestos y, por último, se presentarán las conclusiones.

Introducción

Las dinámicas internas que tienen lugar en Colombia han estado marcadas por la violencia. La historia del conflicto armado colombiano tiene su origen en la lucha por la tenencia de la tierra, las desigualdades económicas y sociales, y la representación política, en cada uno de estos escenarios aparecen antagonismos tan profundos que han calado en el tiempo, el espacio y la historia del país. Es entonces a mediados del siglo XX, en donde La Violencia se configura como el punto de partida y sin retorno de la época más funesta de toda la historia

colombiana y es allí, en donde comienzan a aparecer distintos actores que reclaman justicia social y que como resultado de la represión sistemática y violenta del Estado optan por la vía armada y revolucionaria para salir de ese estado marginal.

En Colombia, las condiciones de violencia y el uso de la estrategia armada han tenido una relación constante con su historia política y con las diversas acciones que se han generado por parte de las élites políticas para el sostenimiento en el poder. Dentro de la línea historiográfica existen autores (Palacios y Safford, 2012; Bushnell, 2014) que reconocen que la violencia ha sido un elemento que ha construido varios de los procesos políticos del país: desde la necesidad de conformar organizaciones insurgentes, hasta las estrategias para su enfrentamiento como la gestión de grupos paramilitares o las transformaciones militares que ha tenido el país.

Si bien es cierto que todas las sociedades a nivel mundial enfrentan retos al interior de sus comunidades para que las regiones se desarrollen, se hace importante mencionar que para la siguiente propuesta se tomará como caso de estudio el departamento de Antioquia en razón de que es un territorio históricamente pujante, productor, industrializado, con una amplia diversidad de sectores productivos medianamente desarrollados y que con sus créditos le aporta un gran porcentaje al PIB Nacional, pero que a su vez, ha sufrido las consecuencias de la violencia derivada del conflicto armado, la desidia estatal, la desigualdad y otros factores que han obstaculizado el desarrollo económico, político y social de sus comunidades, es decir, el desarrollo multidimensional.

Antes de continuar, es necesario definir el concepto de desarrollo multidimensional. Para efectos del presente texto, éste se define como el “proceso mediante el cual una comunidad progresa y crece social, económica, cultural y políticamente.” (Pérez, 2015) Lo anterior, teniendo en cuenta que todas las dimensiones son fundamentales para el desarrollo de las otras y, por tanto, el

avance debe ser conjunto y corresponder con las necesidades tanto universal como diferenciales de cada comunidad y a su vez globales de la sociedad en general, de lo anterior la multidimensionalidad del desarrollo y su importancia en el contexto actual.

El siguiente ensayo pretende describir y analizar los que aquí se contempla como los mayores desafíos que enfrenta este departamento para lograr un desarrollo multidimensional al interior de sus comunidades. Por consiguiente, en el presente documento se hace un análisis exploratorio de la relación existente entre ciertos elementos planteados como desafíos y los obstáculos para su desarrollo, esto sin pretender llegar a resultados confirmatorios. Lo anterior se hará por medio del uso de estadísticas y cifras departamentales, revisión de prensa y de artículos académicos, con el fin de sustentar los argumentos propuestos. Dentro de los desafíos que se lograron identificar se deben mencionar los siguientes: 1. Las fallas institucionales y estructurales 2. El conflicto armado y sus efectos y 3. La pobreza multidimensional. Los anteriores desafíos se tomaron ya que, se observó a lo largo de la investigación y recopilación de información que son elementos constantes en la historia del departamento, son comunes a lo largo del territorio y son permanentes en mayor o menor medida en el tiempo; por lo tanto, éstos serán abordados a lo largo del texto, de manera diferencial y conjunta, con el fin de analizar las causas y los efectos en las comunidades, y de allí se formularán algunas propuestas generales o conclusiones.

Desarrollo

1. Las fallas institucionales y estructurales

La historia de Colombia y la constante convulsión política y social que provienen desde la época colonial y han continuado a lo largo del tiempo hasta la consolidación del Estado actual, muestran un panorama en donde la estabilidad y solidez estructural e institucional son cuestionables. De acuerdo con Kalmanovitz,

existen tres momentos en la herencia colonial que tienen una influencia notable en lo que es hoy en día el Estado colombiano: (2010) en un primer momento el derecho indiano, basado en la constitución tomista, en la cual se puede observar el pactismo, el debilitamiento del sistema de justicia y la confusión de leyes; luego, la invasión de los borbones en el siglo XVIII, quienes condenan el tomismo y expulsan a los jesuitas, y, finalmente, la Constitución de las Cortes de Cádiz, que es en donde se observa la aparición de ciertas reformas liberales. Estos tres momentos significaron para el Estado colombiano el establecimiento de un ordenamiento constitucional, político y económico instituido por las élites locales, quienes “buscaron un tipo de cambio que no obstaculizara sus intereses y que se reflejó en dos desarrollos mutuamente excluyentes: el legalismo burgués representado por la Constitución de las Cortes de Cádiz, y la institucionalidad originada en el despotismo español.” (Albán Moreno, 2017)

A comienzos del siglo XX “la creación de un Estado central (...), fue posible porque los partidos políticos, permitieron cierta autonomía de las elites regionales, que conservaron el control de la tierra y la subordinación del aparato burocrático frente al débil poder central.” (Posada, 2009) Se puede decir que esto les permitió a los grandes hacendados además de perpetuar su poder sobre el territorio y la sujeción de la población campesina, ampararse bajo una figura estatal que estaba bajo sus servicios y se guiaba por sus intereses, agravando la problemática y evidenciando así la precaria situación en la cual se vieron e incluso se siguen viendo sometidos los campesinos, sometidos de una parte por el Estado y sus instituciones y por el otro por los terratenientes y grandes empresarios, que al final del día son quienes están detrás los gobernantes, las leyes, normas e instituciones estatales.

Lo anterior se sigue observando incluso en la actualidad, a pesar de la construcción de varias constituciones que pretendían responder a las necesidades de los cambiantes contextos sociales, la herencia histórica que tenía tanta incidencia en la estructura del estado mismo y sus instituciones, parece ser la

sombra que constantemente se ve representada en la exclusión social, en el establecimiento de las instituciones a favor de las clases dominantes, que en general, hacen parte y están incrustadas en las altas esferas de poder económico y político llevando a que, obstaculice constantemente la consecución de lo establecido en las leyes. Porque, es necesario destacar, que las leyes, deberes y derechos establecidos en la actual constitución política, están dirigidos a la satisfacción de las necesidades de la población en general, sin discriminación alguna, y pretenden buscar el bienestar generalizado de todos los colombianos; sin embargo, en la práctica se encuentran muchas fallas en la implementación, lo que da paso a fenómenos como la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la corrupción, la violencia, entre otros.

Contradictoriamente se observa cómo los actores legales, normalmente buscan cooptar a los actores ilegales, y no de forma contraria, instrumentalizándolos con el fin de mantener sus posiciones de poder, buscando siempre que estos operen en las sombras mientras ellos operan a la luz pública sin ningún tipo de castigo o pena. Las élites están comúnmente relacionadas con el narcotráfico y el despojo de tierras, y los grupos ilegales, son jugadores perfectos para validar a través de la violencia los deseos de los poderosos.

Frente a lo anterior, Valencia y Ávila, (2014) realizaron un análisis sobre la conformación del Congreso de Colombia 2014-2018; su estudio mostró la persistencia de prácticas y costumbres clientelistas dentro de estas estructuras de poder y la indiferencia con la que los entes de regulación, control y justicia observan estas prácticas, de hecho, ya normalizadas. En ese estudio los autores observaron elementos que aún hoy en día son constantes: 1. Parlamentarios poseedores de grandes sumas de dinero que no tienen explicación, 2. Las relaciones con estructuras ilegales, 3. La herencia parapolítica, 4. Las investigaciones judiciales bajo las que están sometidos varios parlamentarios, 5. Las estructuras económicas a las que ciertos parlamentarios pertenecen y por

obvias razones responden. Los elementos mencionados generan preocupación pues es clara la búsqueda por cooptar de manera directa o indirectamente las estructuras estatales para que se vuelvan aún más serviles a los intereses de ciertos sectores, generando una disrupción constante y un obstáculo permanente para el correcto funcionamiento de las instituciones que fueron establecidas para servir a las necesidades de la población y que se instrumentalizan a favor de determinados actores, lo que imposibilita la eliminación gradual de las profundas problemáticas sociales como la inequidad, la desigualdad, la violencia, la impunidad y la injusticia.

Por su parte Bonet y Meisel (2006) proponen que son los obstáculos y vicios institucionales aquellos que traban el desarrollo económico y social de las regiones producto de un proceso evolutivo social, económico y político relacionado con garantizar la consecución de los intereses de determinado sector; y son las limitaciones institucionales las que significan más que avances, retrocesos en cuanto a la búsqueda por propiciar el bienestar de la población.

Las fallas estructurales dieron la vía libre a la aparición en un principio, de grupos guerrilleros surgidos en respuesta a la desigualdad en la tenencia de la tierra, la desidia estatal y las otras formas de violencia indirectas ejercida por parte de las instituciones oficiales sobre la población.

No se puede negar que, estos grupos ilegales han contado con el respaldo de múltiples sectores de la sociedad, quienes, al verse inmersos en unas dinámicas del conflicto tenebrosas, atacados por los grupos insurgentes, optaron por alternativas no menos peores para mantener sus intereses seguros e incluso incrementar su poder, usando como herramienta el miedo causado por la crudeza de la violencia y la impunidad que rodeaban a los grupos paramilitares. Dentro de los sectores que a lo largo del tiempo financiaron, tuvieron algún tipo de relación y protegieron a ciertos grupos paramilitares, se destacan los gremios empresariales, los hacendados, los ganaderos, los comerciantes, algunas

instituciones del Estado como las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía y gobiernos locales y regionales, adicionalmente, estos grupos, durante años “tuvieron una significativa representación en el parlamento colombiano y una profunda afinidad con algunas administraciones y con la concepción de estado comunitario.” (Gallego, La Economía de Guerra Paramilitar: Una Aproximación a sus Fuentes de Financiación, 2005) Su modus operandi, fue decisivo a la hora de alcanzar los objetivos infames de empresarios, ganaderos, políticos y hacendados al ser instrumentalizados para despojar millones de hectáreas a campesinos de todo el departamento, quienes fueron desplazados y en la mayoría de casos, empujados hacia la pobreza extrema. El paramilitarismo y la permisividad institucional frente a la que se consolidó, se sostuvo y desarrolló permitiendo a su vez estrechar la relación con el narcotráfico y posteriormente, permitió desarrollar una estrategia de legitimación socio-cultural basada en la aceptación y adoración de la riqueza y la vida producto de los réditos del narcotráfico y los valores retrógrados en los que se sustentaban los grupos paramilitares. Dando paso así a una cultura plástica y mafiosa, que olvidó las raíces culturales positivas de las comunidades del departamento.

En las ciudades no es tan notorio el abandono estatal y las fallas institucionales y estructurales, como en las zonas rurales, que son a su vez las que han estado siempre presas de la violencia, la desigualdad, la injusticia, la pobreza y la desidia de las entidades gubernamentales. Es un departamento de contrastes, pues mientras que municipios como Sabaneta y Envigado se encuentran en los primeros lugares en cuanto a indicadores positivos “y se ubican como los dos municipios del país con los mejores niveles de calidad de vida, cuando el foco del estudio se aleja del área metropolitana las condiciones de vida de la población antioqueña se precariza.” (GIRALDO, 2020) Por ejemplo, en municipios alejados de las grandes ciudades y de difícil acceso, como Murindó y Vigía del Fuerte se observa la precariedad de la situación cotidiana, a tal punto, que en la actualidad no cuentan con una red eléctrica permanente. De igual manera, existen otras

localidades que presentan situaciones con múltiples problemáticas sociales, el Urabá antioqueño, parte del bajo cauca y del noroccidente, son territorios con altos índices de pobreza multidimensional, por ello es fundamental que estas regiones sean priorizadas departamentalmente, a través del aumento en la inversión social y económica para atacar directamente a las problemáticas mayores. (ver anexo 9),

Se observa un “Estado débil que no garantiza condiciones justas de usufructo de los recursos, lo que genera evidentes perjuicios de diferente orden en esas regiones rurales.” (Garay, 2013) La debilidad estatal, es el resultado de cómo se configuró la estructura social e institucional, basada en la exclusión social, cultural y económica, con un carácter refractario al cambio social democrático, lo cual ha permanecido históricamente, dando como resultado un tejido social “vulnerable ante diversos tipos de actores legales e ilegales que se benefician de tal situación.” (Albán Moreno, 2017)

La descentralización política consignada en la Constitución Política de 1991, aunque tenía como propósito darle mayor autonomía y solidez a las entidades territoriales como las municipalidades y departamentos, con el paso del tiempo se funge como un aspecto negativo. En el departamento antioqueño, aproximadamente el “65 % de los casos de corrupción involucran alcaldes, el 50 % de los casos se vulneraron derechos fundamentales Civiles y Políticos, 40 % derechos Económicos y 10 % derechos colectivos y Medio Ambiente” (Lozano, 2019) Las anteriores cifras dejan entrever la situación crítica por la que atraviesa el departamento, pues son las municipalidades en donde en su mayoría se concentran los actos de corrupción, los que impactan directamente en la vida cotidiana de las comunidades. Es la corrupción uno de los actos más viles, pues le quita recursos a las poblaciones que normalmente son destinados para la satisfacción de sus necesidades básicas, y por ello, éstas generalmente se ven privadas o limitadas en cuanto a sus derechos fundamentales como el acceso a la

educación, la salud, la vivienda digna, agua potable, entre otros; en sus propios territorios.

Por su parte, la situación actual de los pueblos indígenas en el departamento es precaria, la violencia persistente, que ha tomado diversas formas, “junto con la desnutrición, que está causando la muerte de niños y niñas, principalmente de la etnia Emberá, el suicidio, asociado al conflicto armado, es uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades indígenas en esta zona.” (Atehortua, 2020) Sumado a esta realidad, de acuerdo con Alex Espitia, quien es docente de la Organización Indígena de Antioquia, en 2018 siete miembros de la Guardia Indígena fueron asesinados y se reportó entre 2017 y 2020, el desplazamiento forzado de al menos 70 familias. La comunidad indígena en el departamento está conformado por alrededor de 36 mil indígenas, que pertenecen a cinco pueblos: Emberá Chamí, Emberá Eyábida, Emberá Dobidá, Senú y el pueblo Tule, a pesar de ello esta comunidad es una de las que más ha sufrido el conflicto, la desatención estatal, la segregación y el racismo, incluso presente en diversas instituciones estatales. No existe un real reconocimiento de los indígenas, lo que puede conducir a la extinción tanto cultural como físicamente. No existen prácticas gubernamentales serias que se hayan comprometido con la protección de los pueblos indígenas en este territorio, las problemáticas se ven profundizadas dentro de sus comunidades y su rol dentro de la sociedad, es muchas veces ignorado.

Uno de los desafíos con mayor repercusión en la calidad de vida de los antioqueños ha sido el tema de la salud. Frente a esto Germán Reyes, presidente de ASMEDAS Antioquia, “asegura que la intermediación en salud está en manos del sector financiero que extrae rentas del sector público para montar sus negocios (EPS) y obtener ganancias, no sociales sino económicas” (ASMEDAS, 2020) la población tiene un precario acceso a la salud, aunque no es comparable con otros departamentos en donde las cifras son mucho menores, aún es

insuficiente. Si bien a pesar de que se ha aumentado la cobertura, existe una falla en cuanto al acceso y oportunidad en la prestación del servicio, de igual manera, las “altas carteras, deudas con proveedores de insumos médicos y el riesgo inminente del cierre de servicios hacen parte del panorama que viven las instituciones prestadoras de salud (IPS) y hospitales.” (ORTIZ, 2017)

En Antioquia, la ampliación de la cobertura en la prestación de servicios educativos ha ido incrementando con el paso del tiempo, pero el entorno competitivo producto de los retos que implica estar cada vez más involucrados en un mundo globalizado exige que la calidad sea cada vez mejor. Uno de los principales desafíos es la calidad educativa, ya que, al medirse por medio de los resultados de las pruebas SABER “se observa que menos de la mitad de los estudiantes de 5 y 9 grado alcanzan el nivel suficiente en lenguaje y solo un poco más del 20 % lo alcanza en matemáticas.” (Vélez, 2019) Por lo tanto, es profundamente importante cerrar las brechas existentes entre los niveles educativos por medio de ideas innovadoras que permitan fortalecer la conexión existente entre la educación básica y superior, sino, el departamento se verá relegado frente a las necesidades cambiantes del contexto laboral, económico, político, cultural y tecnológico.

De acuerdo con el informe del Monitor Ciudadano de la Corrupción (2019), son los municipios en donde se registra la mayor inversión, pues es allí en donde los ciudadanos se desarrollan en todos los niveles, por ello son los municipios las entidades en donde hay un gran flujo de transacciones, decisiones y recursos públicos en el día a día, y, por tanto, es a su vez una oportunidad para actos de corrupción. Siguiendo con los resultados que arrojó el informe se “detectó en su mayoría hechos de corrupción administrativa (73 %), corrupción privada (9 %) y corrupción judicial (7 %) como los que más se reportaron entre enero del 2016 y julio del 2019.” (Monitor Ciudadano de la Corrupción, 2019), siendo lo anterior una representación clara de lo que es una falla institucional, puesto que las

instituciones públicas y sus funcionarios no cumplen con sus deberes, sino más bien aprovechan los vacíos legales para sacar provecho.

Antioquia a pesar de ser uno de los departamentos con un aceptable grado de desarrollo económico y con un mayor acceso a los derechos básicos del país, no deja de tener problemáticas como la “reconfiguración, descentralización y aumento de las prácticas de clientelismo y corrupción político administrativa en las corporaciones y entidades públicas departamentales, municipales y descentralizadas.” (DNP, 2018) todo lo anterior, ha conllevado a una desinstitucionalización de las mismas que ha sido potencializada por el “debilitamiento, la fragmentación y pérdida creciente de legitimidad de los partidos políticos tradicionales y la llegada al poder de sectores de la dirigencia política emergente poco idóneos para gerenciar las corporaciones y entidades públicas.” (DNP, 2018)

Se observa también una crisis de la administración de justicia, que se ha caracterizado por una histórica, profunda, alta y persistente impunidad en materia penal y de justicia civil. Existen serios problemas de inequidad y una deficiencia institucional a la hora de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sumado a esto, hay un debilitamiento del modelo de departamento establecido en la Constitución puesto que existe una desconexión entre lo que está allí consignado y lo que sucede en la práctica. Se hace necesario una transformación del modelo, hacia una gestión pública modernizada que permita la eficacia y fortalezca las diversas formas de control: administrativo, político, técnico, institucional, social y judicial. (DNP, 2018)

Por otro lado, es notoria la deficiencia en cuanto a la planificación del territorio urbano y rural, ya que, los planes de desarrollo territorial no responden a los contextos y las necesidades de los mismos. No hay una real capacidad institucional para gestionar una planificación sustentable del territorio, lo que ha contribuido negativamente para la pérdida “de posicionamiento y competitividad

del Departamento, así como el aumento de las limitaciones para el acceso a oportunidades y al deterioro en la formación de capacidades que afectan la calidad de vida de las comunidades” (DNP, 2018)

2. El conflicto armado

Colombia ha estado sumida en un conflicto de ya varios decenios, que tiene como uno de sus pilares primigenios la lucha por la tenencia de la tierra, es aquí en donde aparece el antagonismo entre el campesinado y los hacendados, terratenientes o empresarios agroindustriales, antagonismo tan profundo que ha calado en el tiempo, el espacio y la historia del país. Uno de los actores más afectados por este conflicto es “la población campesina que lucha desde hace décadas contra los grandes propietarios para mejorar sus condiciones de vida y reclaman al Estado el estatus de plena ciudadanía.” (Posada, 2009) Es necesario resaltar que algunas organizaciones ven la existencia de “dos grandes conflictos en el sector rural: el conflicto agrario y el conflicto armado interno” (PNUD, 2011, pág. 186), y no lo ven uno como resultado del otro.

El conflicto se configura dentro de un marco en donde las entidades estatales están manejadas por las élites, haciendo que los procesos de distribución equitativa de la tierra no tengan un lugar serio dentro de la agenda pública, incluso obstaculizan los procesos democráticos y de representación política invisibilizando a las comunidades y sus derechos.

El conflicto va mucho más allá de la desidia e indiferencia de un gobierno débil sometido a intereses particulares, pues además de ello, la estructura agraria está caracterizada por la tendencia hacia la concentración apoyada en la violencia estatal y terrateniente y por el exiguo aprovechamiento de tierras productivas que, generalmente son utilizadas para actividades como el pastoreo de ganado y no para cultivos, “produciendo así la expansión de la frontera agrícola hacia tierras

frágiles, generando un grave riesgo ambiental y problemas sociales.” (Rivera, 2007)

Por lo tanto, el problema agrario se definió en torno a varios elementos, de los cuales se resaltan: “la existencia de la gran propiedad territorial explotada en forma ineficiente, con base en el trabajo de campesinos, aparceros y agregados.” (Pineda, 2018), un marco legal que en principio parecía favorecer a la población vulnerable, pero que no servía más que para asegurar el poder hacendatario, constantes movilizaciones campesinas que fueron reprimidas con violencia, fracturadas e ignoradas a tal punto, que algunas de los cuales se transformaron en grupos insurgentes que luego tendrían una insondable repercusión en la historia de los siglos XX y XXI del país.

En este caso, el conflicto armado interno en Antioquia, se constituye en una manifestación sustancial de este *conflicto histórico estructural*, (Albán & Rendón, 2011) en el cual se incrustaron con el paso del tiempo fenómenos como el narcotráfico y el paramilitarismo, y lo que derivó posteriormente de dichos fenómenos como expresiones de violencia brutales y sostenidas en el tiempo, con algunas variaciones geográficas.

Por su parte, el departamento de Antioquia ha sido uno de los territorios más afectados por la violencia resultado del conflicto. Se estima que 1 de cada 3 muertes en el conflicto armado tuvo lugar en Antioquia, (Marulanda, 2018) siendo esa cifra aterradora, puesto que es uno de los departamentos que ha tenido que sufrir la brutalidad de la violencia del conflicto y de las acciones violentas de grupos insurgentes como las FARC, el ELN, los grupos paramilitares y grupos ilegales como bandas criminales y carteles. (ver Anexo 1,2,3,4,) Pero esta situación no es casualidad, corresponde a la ubicación geográfica que es estratégica para todos los actores armados. Su ubicación es privilegiada pues de acuerdo con el coronel Jhon Marulanda, analista internacional en seguridad y defensa “Todas las rutas para atravesar a Colombia de lado a lado pasan por esta

zona, lo que permite el movimiento de mercancías, gente y drogas”. (Marulanda, 2018)

Adicionalmente el departamento antioqueño es privilegiado por la cantidad de recursos que dispone, no por nada es el segundo departamento en participación el PIB a nivel Nacional, solo detrás de Bogotá D.C. Tiene sectores altamente productivos y diversificados, que van desde la minería, la agricultura, la ganadería hasta la producción industrial, lo que hace el territorio una presa atractiva para los diversos actores ilegales. Este departamento cuenta con una característica especial y es que, al ser tan rico y productivo, los grupos insurgentes buscaron atacar para darle un a la economía nacional, y, por tanto, ciertos sectores económicos buscaron proteger a toda costa sus empresas financiando grupos contrainsurgentes. Esto se repite en varios departamentos, como en el Valle del Cauca, sin embargo, aquí es mucho más notoria la presencia de grupos contrainsurgentes o paramilitares, que a su vez trabajaban de manera conjunta con las fuerzas militares y policiales, todo esto amparado por las instituciones estatales que en medio del conflicto buscaron responder a los retos cada vez mayores que les imponían los grupos insurgentes.

Según el informe realizado por el profesor Jorge Giraldo para la comisión histórica del conflicto y sus víctimas Política y guerra sin compasión, pedido por el Gobierno Nacional durante el proceso de paz con las Farc, Antioquia produjo el 27 % de los afectados, siendo el segundo departamento Cauca con 7 %, la diferencia entre estos dos es de cuatro a uno, es decir que, por cada víctima del Cauca, había cuatro de Antioquia. (ver Anexo 5) “Cualquiera que sea la modalidad de victimización que se tome, Antioquia ha ocupado siempre el primer lugar, con dos o tres veces más víctimas que el departamento que le sigue”. (Marulanda, 2018) La explicación ante esta situación, es que en el departamento se llegaron a concentrar todos los actores del conflicto: las guerrillas ELN, FARC, EPL y M-19, además de los grupos paramilitares, las bandas criminales y los carteles y narcotraficantes. (ver Anexo 6) Pero, lo que se debe destacar es que más que su

presencia, fueron los constantes enfrentamientos entre cada una de ellas las que dejaron miles de víctimas cada año.

Sumado a ello, en esta región por sus condiciones climáticas y geográficas, además de la constante presencia de grupos armados e ilegales, se propiciaron las condiciones para que se dieran con mayor facilidad en comparación con otros departamentos todas las economías ilegales: la minería, cultivos de uso ilícito, trata de personas, extorsión, la producción de estupefacientes, entre otros; lo que era favorable para los grupos ilegales, las bandas criminales y los carteles, puesto que siempre habían recursos monetarios que les permitían financiar y sostener sus operaciones, asegurando su “governabilidad” en el territorio.

Entre 1997 y 2010, ciertos municipios sufrieron más incidencias del conflicto en cuanto a la cantidad de acciones, entre estos se destacan: Mutatá, Dabeiba, Ituango y Valdivia, en las cercanías al Nudo del Paramillo; Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Campamento y Anorí, también en el norte en el margen oriental del río Cauca; Caicedo, Abriaquí y Giraldo en el occidente, en inmediaciones del páramo del Sol; y, del suroriente, Nariño, San Francisco, Cocorná, San Luis, San Carlos, Granada, San Rafael, Guatapé, Alejandría y Concepción. (Taborda, Santa, & Corredor, 2018) Son los alrededores de estos municipios las áreas en donde se ha dado una mayor cantidad de acciones armadas a nivel nacional, como por ejemplo los límites con el departamento del Chocó, Bolívar y Cauca.

Por otro lado, las áreas con menor conflictividad o presencia de grupos armados se encuentran contenidos en una franja central que va desde las márgenes del río Cauca, pasando por el centro hacia el sur del departamento, hasta los límites de las subregiones Suroeste y Occidente. De igual manera, los municipios de las zonas más cercanas al Valle de Aburrá, y las subregiones Norte, Nordeste y Oriente, y, además, la zona del norte de Urabá en donde el conflicto con el paso del tiempo fue perdiendo intensidad. Sin embargo, se debe aclarar que en los

municipios cercanos al río Cauca y el norte de Urabá había presencia y dominio de grupos paramilitares y bandas criminales. (Taborda, Santa, & Corredor, 2018)

Adicionalmente, a las acciones de extrema violencia derivadas de las confrontaciones entre los diferentes actores, surgen otras con menor visibilidad como:

“las restricciones al paso de alimentos y víveres, la estigmatización y el señalamiento de líderes comunitarios y poblados enteros con uno u otro grupo, las restricciones a la circulación de personas y transporte, e incluso oleadas de desplazamiento por el temor a los enfrentamientos.” (Taborda, Santa, & Corredor, 2018)

Es importante destacar que la situación de conflictividad en el departamento fue cambiando gradualmente, por ejemplo, en 2010 con el proceso de desmovilización de un gran porcentaje de paramilitares, se dio una modificación en la intensidad y las acciones violentas, de igual manera luego de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, y la desmovilización, la intensidad del conflicto disminuyó considerablemente. Sin embargo, luego del vacío que dejó la desmovilización de la mayoría de los diferentes frentes de las FARC, otros grupos empezaron a ocupar esos espacios y se ha visto una transformación en el conflicto, dentro de estos se destacan “el Clan del Golfo y la Oficina del Valle de Aburrá, estructuras que se complementan con grupos de menor tamaño, y operaciones básicamente urbanas, conocidos como: bandas y combos.” (Correa & Jaramillo, 2019) De acuerdo con los registros de prensa, las acciones que predominaron en el departamento, corresponden a homicidios, masacres, extorsiones y combates.

El conflicto en Antioquia se caracterizó por sus múltiples impactos en la población civil, la infraestructura, la economía y la política, teniendo impactos más graves en las poblaciones rurales. “Los efectos del conflicto armado sobre la población civil comprende violaciones específicas a los derechos humanos, como los derechos a

la vida, a la libertad, a la propiedad privada, y las posibilidades de expresión y participación política.” (Correa & Jaramillo, 2019)

Otro elemento que se hace necesario destacar es que, de acuerdo con el Observatorio del Nivel de Riesgo a la Labor de Defensores, Defensoras, Líderes, Líderesas Sociales y Comunales en Antioquia (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU Nodo Antioquia, 2017) entre 2010 y 2017 han sido asesinados en el departamento alrededor de 150 líderes, situación que se ha agudizado en los últimos dos años. Adicionalmente, se observa que, en términos de derechos colectivos, el conflicto en el territorio antioqueño agrupo acciones violentas en contra de minorías como grupos indígenas, afrocolombianos, comunidades LGBTI, entre otros. (Taborda, Santa, & Corredor, 2018)

Son los entornos rurales los que más estuvieron afectados por las masacres, “dado que el 61,7% de estas ocurrieron en las zonas rurales y el 38,3% en urbanas.” (Oidor, 2012) Esto puede deberse a que es en las zonas montañosas en donde existe una mayor penetración y presencia de grupos guerrilleros, además del hecho, que la presencia estatal y de fuerza policial en estas zonas es limitada.

El conflicto es un fenómeno cambiante, adaptable y evoluciona con el paso del tiempo, respondiendo a los contextos nuevos. Durante 2020, se observa una reconfiguración del mismo, puesto que luego de la firma del acuerdo de 2016 y que, como consecuencia de los vacíos en las zonas de control de economías ilegales anteriormente controladas por las FARC nuevos grupos delictivos organizados han ocupado esos espacios, ejerciendo formas diferentes de violencia.

3. La pobreza multidimensional

La pobreza multidimensional ha sido entendida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como “un concepto más allá de la falta de ingresos para la satisfacción de necesidades, sino más bien como personas que sufren carencias en las dimensiones: educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y nivel de vida en general.” (Gerlach, 2018) En el caso colombiano, el DANE desarrolló el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cuál está compuesto por cinco dimensiones de calidad de vida, en donde no se incluye el ingreso; consta de cinco dimensiones medidas a nivel hogar:

“i) condiciones educativas, ii) condiciones de la niñez y juventud, iii) salud, iv) trabajo y v) condiciones de la vivienda y servicios públicos domiciliarios. Estas dimensiones se dividen en 15 variables y un hogar con privaciones en al menos 5 variables (que representan el 33% de las privaciones) se considera en condición de pobreza multidimensional. (DNP, 2019)”

En Antioquia el panorama no es tan desalentador como en otros departamentos, la brecha de la pobreza, que mide según el DANE, como “la cantidad de dinero que le falta a una persona en situación de pobreza para dejar de estar en esa situación, es decir, para alcanzar la línea de pobreza.” (2019) Este departamento está por debajo del promedio nacional, pero de 2018 a 2019 se observó un ligero aumento. (véase anexo a)

En cuanto a la incidencia de la pobreza monetaria extrema, se define como “el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes alimentarios.” (DANE, 2019) en el departamento de mantuvo entre 6,7 y 7.0 para el año 2018 y 2019 respectivamente. Estas cifras reflejan que alrededor del 7,0% de la población del departamento se mantuvo en la pobreza monetaria extrema, cuando el porcentaje debería ser 0, teniendo en consideración la cantidad de recursos naturales y posibilidades económicas y comerciales que el territorio les puede proveer a los habitantes.

Por otro lado, el coeficiente de GINI es un indicador que muestra el grado existente de desigualdad en la distribución del ingreso. Este coeficiente nos indica que cuánto más se acerque el valor medido a 1, más desigual será la distribución de los ingresos. En este sentido, el departamento antioqueño presenta un coeficiente de GINI muy cercano al promedio nacional, ocupando el séptimo lugar de 24 departamentos estudiados. Para 2018, el coeficiente de GINI fue de 0.501 y para 2019 se incrementó a 0.511, de acuerdo con los cálculos realizados por el DANE en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2018-2019). En el siguiente mapa se puede ver gráficamente con mayor facilidad.(véase anexo b)

Las cifras anteriores muestran una situación un poco inusual, puesto que, mientras Antioquia ocupa los primeros lugares en desarrollo, industrialización, aporte al PIB, entre otros; en el país, se observa un alto grado de desigualdad en los ingresos, lo que implica que aunque el departamento al parecer sea uno con una gran cantidad de recursos económicos y de ingresos, estos últimos no se reparten de manera equitativa entre los habitantes de territorios, sino que más bien, se puede argumentar presenta cierto grado de concentración en una población pequeña.

El departamento de Antioquia durante los últimos años ha presentado un constante crecimiento económico, a pesar de los efectos adversos que ha tenido la pandemia producida por Covid-19 desde el 2020 en la economía. (ver Anexo 7) Sin embargo, a pesar de su crecimiento positivo en relación con otros departamentos, presentan cifras preocupantes de pobreza multidimensional y desigualdad. (ver Anexo 8)

Por su parte, en 2020 Antioquia representó un poco más del 14,5% del total del Producto Interno Bruto nacional, es decir, que de cada "\$1.000 que se generaron, \$145 vinieron del departamento, lo que da cuenta del volumen de la economía antioqueña, su importancia, y el impacto que tiene en el desarrollo nacional." (Mesa, 2021)

El covid-19 representó uno de los principales retos para la economía del departamento, ha sido la recuperación del empleo y la generación de la formalidad. Las cifras de desempleo han llegado a cifras preocupantes, el 2020 cerró, según el DANE, con una tasa de desempleo de 18,2%. “El dato quiere decir que el indicador subió seis puntos porcentuales en apenas un año, puesto que la capital antioqueña había cerrado 2019 con 12,2% de la población sin una ocupación.” (Mesa, 2021)

La pobreza multidimensional en Antioquia para 2019, aumentó en relación con el año anterior, aunque no fue un cambio drástico, es un elemento que se debe tener en cuenta. Para el agregado departamental, cabeceras, centros poblados y rural disperso correspondió a 15,7%, 10,2% y 35,9% (DANE, 2020) En la siguiente gráfica se puede ver representada la pequeña variación. (véase anexo c)

Gráfico 3: Incidencia de la Pobreza multidimensional por IPM (porcentaje) Total nacional, total departamental, cabecera y centros poblados- rural disperso (véase anexo D)

Para 2019, dentro de las dimensiones de calidad de vida, las mayores brechas se presentaron en las siguientes dimensiones:

“trabajo informal con 64,3% en Antioquia frente a 72,9% en el total nacional; barreras de acceso a servicios de salud con 2,6% en Antioquia frente a 5,5% en el total nacional e inadecuada eliminación de excretas con 8,4% en Antioquia frente a 11,0% en el total nacional. Por otra parte, las menores diferencias en las privaciones entre el departamento de Antioquia y el total nacional se presentaron en los indicadores: inasistencia escolar con 2,5% en Antioquia frente a 2,7% en el total nacional; sin aseguramiento en salud

con 11,2% en Antioquia frente a 11,3% en el total nacional y trabajo infantil con 1,8% en Antioquia frente a 1,7% en el total nacional.” (DANE, 2020)

De acuerdo con Muñeton y Vengas (2014) el centro del departamento antioqueño cuenta con mejores condiciones de vida que las zonas fronterizas con otros departamentos. Los municipios que colindan con municipios pobres de otros departamentos tienden a tener altos índices de pobreza, sobre todo a las subregiones del Occidente, Urabá y Bajo Cauca. En este caso, al analizar los mapas de acciones armadas del conflicto y las zonas con altos índices de pobreza, se encuentra cierta correlación, ésta forma “una especie de cinturón que va desde los límites de Antioquia con el departamento del Chocó y el municipio de Urao hasta el Bajo Cauca antioqueño, pasando por algunas áreas del Occidente y otras próximas al Nudo del Paramillo.” (Taborda, Santa, & Corredor, 2018)

Estas zonas se caracterizaron por la influencia de las FARC, el despliegue del ejército y la presencia paramilitar. Se debe resaltar, que la región el oriente antioqueño, el valle de Aburrá y el Suroeste, son unas subregiones en donde la asociación entre la pobreza y el conflicto es indirecta, ya que, hay una alta cantidad de acciones armadas, pero unos bajos niveles de pobreza. En estos territorios no hubo una coincidencia entre el conflicto y las actividades económicas, por lo que estas tuvieron cierta independencia de las consecuencias del conflicto.

Por otro lado, se debe analizar el impacto del conflicto en la economía desde otra perspectiva, teniendo en cuenta que el conflicto generalmente castiga el desarrollo económico de los territorios, siendo las poblaciones las más afectadas. En sus primeras décadas el conflicto estuvo enmarcado en lo político y las reclamaciones insurgentes. Con el paso del tiempo y la incrustación del narcotráfico en el conflicto, éste se tornó en algo más criminal, se convirtió en “captador de rentas económicas de narcotráfico, extorsiones y secuestro.” (Gutierrez & Sanchez, 2006) De lo anterior, se puede presumir que, aunque algunos territorios presenten

acciones violentas, no son pobres pues reciben algunos de los réditos del narcotráfico de manera indirecta.

Conclusiones

Es necesario hacer referencia que los desafíos para el desarrollo de este departamento, hacen referencia a las fallas estructurales e institucionales que claramente, no hacen parte únicamente de este departamento, sino que se extienden a lo largo y ancho del territorio nacional, sin embargo, es fundamental entender que sin la eliminación, reformulación, reestructuración y cambio de todos aquellos elementos que no permite que las instituciones funciones de acuerdo a su razón de ser, será imposible que las poblaciones y territorios logren explotar su máximo potencial económico, social, cultural e incluso político, y el conflicto y la desigualdad permanecerán en las comunidades.

El Estado a lo largo del tiempo ha hecho avances, pero estos son insuficientes y más cuando muchas instituciones y entidades del gobierno están subordinadas a las decisiones intereses y deseos de los remanentes de las antiguas familias hacendatarias. Una larga marcha que se dirige simultáneamente hacia el cambio social, la construcción del Estado, la participación política y el desarrollo, y que se enfrenta en el camino a movimientos opuestos de exclusión y opresión, de concentración de la propiedad y el ingreso, de evasión de cargas y de responsabilidades por parte de amplios sectores de elites, corrupción, violencia e ineficiencia estatal y de crisis del sistema de decisiones políticas. (Kalmanovitz, 2010) Como se ha visto evidenciado, el acceso a la tierra ha sido la raíz de varios conflictos y representa una gran fuente de poder político y social. No obstante, es un determinante clave en la productividad y un gran motor en una economía como la colombiana, al tener una característica rural desde sus inicios.

Según Posada (2009) “el Estado colombiano tiene características especiales que favorecen la violencia, y la primera de ellas es que su poder efectivo no alcanza a

cubrir todo el territorio.” Por un lado, la infraestructura y la estructura estatal existente es insuficiente para las zonas rurales y deja casi desprotegidas a las zonas rurales, que son a su vez, las más afectadas por los fenómenos de la violencia y la corrupción, de allí que “este vacío de poder invita a las organizaciones de violencia a ejercer dominaciones locales y a transferir rentas por la fuerza para financiar esa dominación.” (Posada, 2009)

El conflicto causa altas privaciones al buscar sus fines políticos y económicos: afecta el desempeño económico, la infraestructura y el capital humano.” (Taborda, Santa, & Corredor, 2018) Se pueden observar dos situaciones en el departamento de Antioquia: la primera de ellas hace referencia a la relación directa existente entre el conflicto y la pobreza, puesto al existir un entorno conflictivo y violento, las comunidades no pueden desarrollar su potencial económico, político, social y cultural, pues, normalmente son desplazadas o están asediadas por las acciones de los grupos ilegales. Esta situación tiene lugar normalmente, en zonas rurales en donde no hay presencia estatal, lo que le hace fácil a los grupos poner en marcha sus acciones. Por otro lado, y como segunda situación, se encuentra que hay áreas con mayores recursos, que se vuelven atractivas para los grupos ilegales, pues allí se pueden encontrar más recursos políticos, económicos y sociales para disputar.

El departamento de Antioquia tiene múltiples potencialidades para desarrollar sus territorios, sin embargo, se hace evidente que tiene a su vez grandes desafíos para lograr sus objetivos en pro del desarrollo. En un primer momento se puede observar cómo en mayor o menor medida las dinámicas del conflicto armado interno han condicionado el desarrollo de manera positiva y negativamente de las comunidades al interior de los municipios y ciudades. Es importante resaltar que no se puede culpar única y exclusivamente al conflicto de la pobreza multidimensional y la desigualdad social, si bien es un elemento que incide, no es la única causal.

Si bien se han hecho avances en temas como la educación, siendo este un elemento importante para desarrollar a las poblaciones, es insuficiente para lograr una transformación estructural que garantice y pretenda eliminar los fenómenos negativos que están presentes en las comunidades colombianas. A nivel nacional, y sin ser excepción el departamento de Antioquia, ha estado preso de las alianzas llevadas a cabo por las élites regionales, las cuales han utilizado de manera continua los peores extremos de violencia, pactos basados en el clientelismo y han apelado a la ética patrimonialista de los grupos ilegales para mantener su statu quo, el cual les ha permitido obtener cuantiosos beneficios.

De esto, que se hayan analizado otros desafíos como las fallas estructurales e institucionales. La estructura estatal está cooptada por ciertas elites que la moldean para que sirva a sus intereses, esto ha generado mucha conflictividad en la sociedad, puesto que muchas de las necesidades básicas no son satisfechas por el ente que se supone que debería procurarse, más bien, existe una constante, en un gran porcentaje se observa la incapacidad del Estado para responder a las necesidades y la desatención del mismo, sobre todo en comunidades rurales, las que históricamente han sido las principales víctimas de las vejaciones y brutalidades del conflicto. Adicionalmente, al interior de las instituciones se encuentran fallas profundas que impiden su correcto funcionamiento, dentro de las que se destacan la corrupción y la desconexión de las mismas frente a su razón de ser.

Para el contexto colombiano, el desarrollo de las regiones, departamentos, municipios y comunidades no está condicionado únicamente por la desmovilización de los actores armados, que aunque, es un factor que incide en un gran porcentaje en la estabilidad de la sociedad, no representaría la terminación del conflicto, puesto que para que esto suceda, el Estado con toda su estructura, junto con sus instituciones debe poner sus esfuerzos por atacar las causas y problemáticas asociadas al conflicto y su perpetuación en el tiempo y en

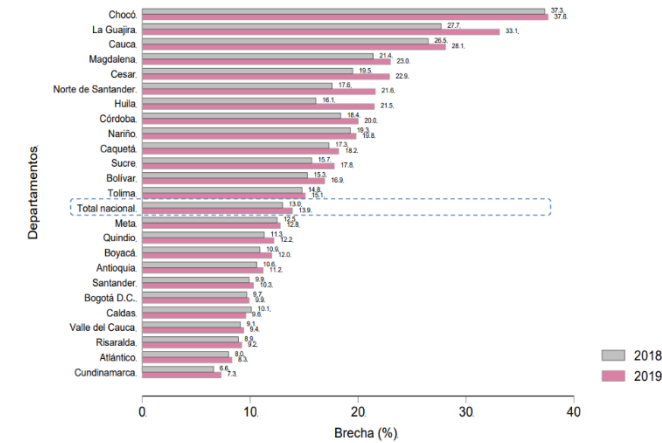
el espacio. Con respecto a esto, se debe empezar por entender y atender las particularidades de cada territorio a la hora de diseñar políticas públicas, además de proveer una presencia estatal sólida que genere confianza en las comunidades, en donde se vea una intervención gubernamental a nivel tanto nacional, como departamental y municipal, a través de entidades que se encarguen y apropien del manejo del orden público, la atención a las víctimas del conflicto, y el acompañamiento a personas desmovilizadas de todo tipo de estructuras.

Bibliografía

ANEXOS:

ANEXO A

Gráfico 1: Brecha de la pobreza monetaria Total nacional y departamental, Cifras en porcentaje. Años (2018-2019)

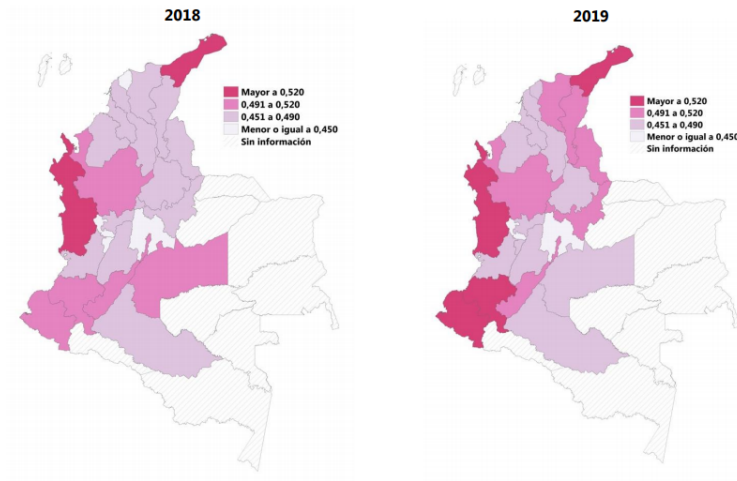


Fuente: DANE, cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2018-2019).

Fuente: (DANE, 2019)

ANEXO B

Mapa 1: coeficiente de Gini por departamentos



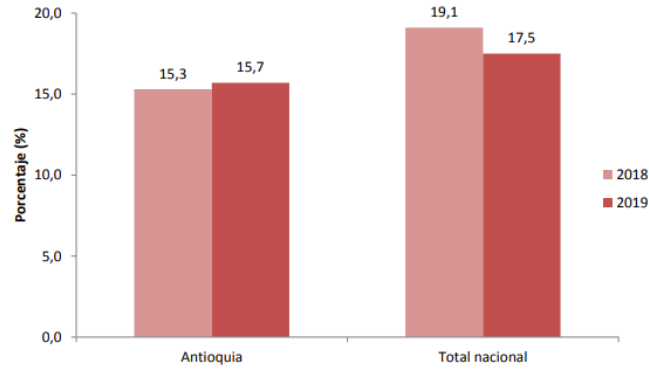
Fuente: DANE, cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2018-2019).

Fuente: (DANE, 2019)

ANEXO C

Grafico 2: Pobreza multidimensional Región- Departamento Antioquia.

Año 2019

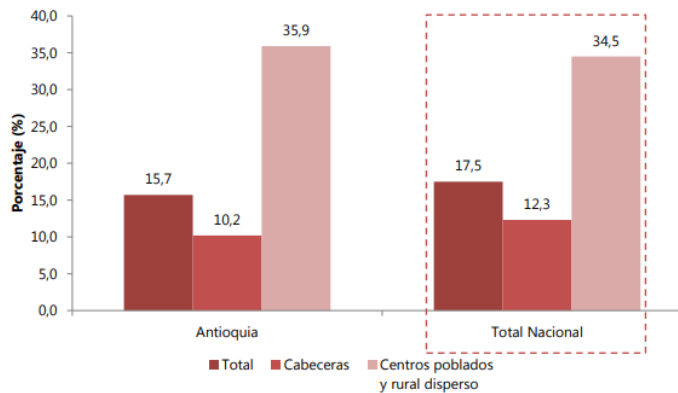


Fuente: DANE, ECV 2018-2019.

Fuente: (DANE, 2020)

ANEXO D

Año 2019



Fuente: DANE, cálculos con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2019.

Fuente: (DANE, 2020)

Albán Moreno, A. (2017). Instituciones y conflicto en Colombia: la metáfora del espejo. *Ensayos de Economía*, 37-63. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2619-65732017000100037&lng=en&tlng=es.

- Albán, A., & Rendón, J. (2011). *Crecimiento, Desarrollo y Democracia. Los Contrapesos de un proceso Incompleto*. (Segunda ed.). Cali: Universidad Libre Seccional Cali.
- ASMEDAS. (11 de abril de 2020). *El problema de la salud en Antioquia*. Obtenido de ASMEDAS:
<https://asmedasantioquia.org/2020/04/11/el-problema-de-la-salud-en-colombia/>
- Atehortua, A. (21 de abril de 2020). *Indígenas de Antioquia: acorralados por el conflicto y abandonados por el Estado*. Obtenido de Hacemos Memoria:
<http://hacemosmemoria.org/2020/04/21/desde-2018-se-recrudescio-el-conflicto-armado-en-los-territorios-indigenas-de-antioquia-alexis-espitia/>
- Barrero G., E. (24 de Marzo de 2017). La reforma agraria y el problema de las tierras sin resolver en Colombia. *Las 2 Orillas*.
- Bonet, J., & Meisel, A. (2006). El legado colonial como determinante del ingreso per cápita departamental en Colombia. *Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, Banco de la República*(75), 1-61. Obtenido de <http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-75.pdf> [Links]
- Correa, D., & Jaramillo, J. E. (2019). Reconfiguración del conflicto armado. Antioquia. *Documentos de Trabajo INER* ,
<https://kavilando.org/images/stories/documentos/Reconfiguracin-del-conflicto-armado.pdf>.
- DANE. (2019). *Boletín Técnico: Pobreza Monetaria Departamental 2019*. Bogotá: DANE.
- DANE. (2020). *Medida de Pobreza Multidimensional Municipal de Fuente Censal*. BOGOTÁ: DANE.
- DANE. (2020). *Pobreza multidimensional Región - Departamento Antioquia*. Bogotá: DANE.
- DANE. (2020). *Pobreza multidimensional Región - Departamento Valle del Cauca*. Bogotá: DANE.
- DANE. (2021). *Cuentas departamentales: Producto Interno Bruto por departamento* . Bogotá : DANE.
- DNP. (2018). *Seguimiento al avance en metas de Víctimas en el Plan de Desarrollo Departamental 2018-2019 “El Valle está en Vos”*. Santiago de Cali: Departamento Administrativo de Planeación.

- DNP. (2019). *POBREZA MONETARIA Y POBREZA MULTIDIMENSIONAL ANÁLISIS 2008-2018*. Bogotá: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
- Gallego, C. M. (1990). *Autodefensas, Paramilitares y narcotráfico en Colombia, El caso de Puerto Boyacá*. Bogotá: Quito Editores.
- Gallego, C. M. (2005). La Economía de Guerra Paramilitar: Una Aproximación a sus Fuentes de Financiación. *Análisis Político*.
- Garay, L. (2013). *Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista*. Bogotá: Contraloría General de la Nación .
- Garay, L., Salcedo, E., De León-Beltrán, I., & Guerrero, B. (2008). *La captura y reconfiguración cooptada del Estado*. Bogotá: Método, Avina y Transparencia por Colombia .
- García, M., García, M., Rodríguez, J., Revelo, J., & Espinoza, J. (2011). *Los Estados de País. Instituciones municipales y realidades locales*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Gerlach, V. (18 de diciembre de 2018). *¿Qué es Pobreza Multidimensional?* Obtenido de Fundación Trascender : <https://fundaciontrascender.cl/blog/opinion/que-es-pobreza-multidimensional/>
- GIRALDO, M. I. (20 de febrero de 2020). La periferia concentra lo más precario de Antioquia. *El Colombiano* , págs. <https://www.elcolombiano.com/antioquia/medida-de-pobreza-en-antioquia-LA12479534>.
- Gómez, J., Rodríguez, S. C., Suárez, V. A., & Mayorga, C. (2019). *Antioquia Silenciada* . Obtenido de La Paz En el Terreno : <https://lapazenelterreno.com/mapas-de-riesgo/antioquia-silenciada/>
- Gonzalo, S. G., & Camacho, A. G. (2008). *Trujillo, una tragedia que no cesa. Primer informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación*. Bogotá: Editorial Planeta.
- Gutierrez, F., & Sanchez, G. (2006). *Prólogo. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. . Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri). Bogotá: Norma.
- Kalmanovitz, S. (2010). Constituciones y crecimiento económico en la Colombia del siglo XIX. En A. Meisel, & M. Ramirez, *Economía Colombiana del Siglo XIX* (págs. 575-616). Bogotá: Fondo de Cultura Económica y Banco de la República.

- López, C. (2010). *Y redundaron la patria... De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Bogotá: Random House Mondadori.
- Lozano, M. (30 de julio de 2019). *En Antioquia el 65 % de los casos de corrupción involucran alcaldes*. Obtenido de TeleMedellin:
<https://telemedellin.tv/en-antioquia-casos-corrupcion-involucran-alcaldes/343797/>
- Marulanda, O. P. (23 de agosto de 2018). Antioquia: blanco de todos en la guerra. *El Colombiano*, págs.
<https://www.elcolombiano.com/antioquia/antioquia-blanco-de-todos-en-la-guerra-LD9207841>.
- Mesa, L. V. (22 de febrero de 2021). En 2019 Antioquia representó 14,5% del total del Producto Interno Bruto nacional. *La Republica*, págs.
<https://www.larepublica.co/especiales/empresarios-del-ano-2020/antioquia-represento-en-2019-145-del-total-del-producto-interno-bruto-nacional-3128754>.
- Monitor Ciudadano de la Corrupción. (2019). *Así se mueve la corrupción*. Bogotá: Corporación Transparencia por Colombi.
- Muñeton, G., & Vanegas, J. (2014). *Análisis espacial de la pobreza en Antioquia*. Bogotá: Equidad y Desarrollo.
- OCHA, UNCT Colombia. (2021). *Briefing Regional, Valle del Cauca, diciembre 2020*. OCHA, UNCT Colombia.
- Oidor, C. A. (2012). Anatomía del conflicto armado en el Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI. *Guillermo de Ockham*, 83-99.
- ORTIZ, H. T. (13 de noviembre de 2017). Riesgo inminente de morir, fantasma que persigue a hospitales. *El Tiempo*, págs.
<https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/hospitales-de-antioquia-en-riesgo-por-deudas-150260>.
- PARES . (24 de abril de 2015). *LOS MAPAS DEL CONFLICTO*. Obtenido de Fundación Paz y Reconciliación :
<https://pares.com.co/2015/04/24/los-mapas-del-conflicto/>
- Pérez, J. (09 de enero de 2015). *Introducción al concepto de desarrollo*. Obtenido de El Orden Mundial :
<https://elordenmundial.com/introduccion-al-concepto-de-desarrollo/>
- Pineda, F. (2018). La lucha por la tierra en Colombia: génesis de un conflicto que no acaba . *Goliardos* , 10-20.

PNUD. (2011). *Colombia rural. Razones para la Esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano* . Bogotá : INDH-PNUD.

Posada, A. R. (17 de Agosto de 2009). *El problema de la tierra en la guerra y la paz*. Obtenido de Razón Pública :
<https://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/580-el-problema-de-la-tierra-en-la-guerra-y-la-paz.html>

Rivera, V. A. (07 de Diciembre de 2007). *La tenencia de la tierra: un problema en Colombia*. Obtenido de Agencia Prensa Rural :
<https://prensarural.org/spip/spip.php?article1288>

Taborda, M. M., Santa, G. M., & Corredor, J. E. (2018). Conflicto armado y pobreza en Antioquia Colombia. *Apuntes del Cenes*, 213–246.
doi:<https://doi.org/10.19053/01203053.v37.n65.2018.5460>

VALENCIA, J. F. (21 de mayo de 2020). Diez alcaldes imputados por presunta corrupción en contratos para la atención de la covid-19. *El Colombiano* , págs.
<https://www.elcolombiano.com/colombia/alcaldes-imputados-por-irregularidades-en-contratos-para-la-atencion-del-covid-19-LB13038627>. Obtenido de El Colombiano .

Valencia, L., & Ávila, A. (2014). *Herederos del mal. Clanes, mafias y mermelada. Congreso 2014-2018*. Bogotá: Ediciones B .

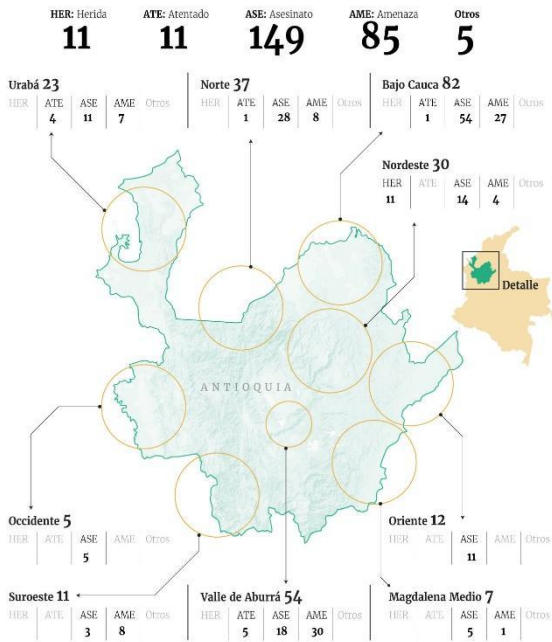
Vélez, C. M. (06 de febrero de 2019). Los retos para el sistema educativo en Antioquia. *El Colombiano* , págs.
<https://www.elcolombiano.com/director-por-un-dia/jorge-mario-velasquez/los-retos-para-el-sistema-educativo-en-antioquia-LH10171192>.

Yagarí T., P. (22 de Diciembre de 2016). *Resolver la tenencia, el uso de la tierra y el desarrollo rural: Un tema clave para la paz*. Obtenido de Grupo Semillas: <http://www.semillas.org.co/es/un-tema-clave-para-la-paz>

Anexos

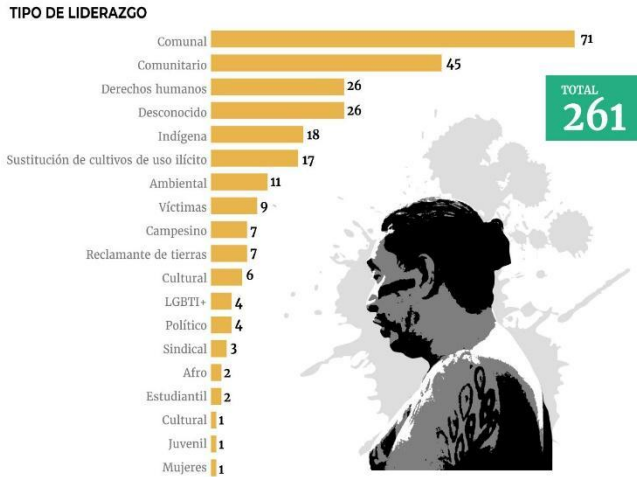
Anexo 1

Fuente: (Correa & Jaramillo, 2019)



Anexo 2

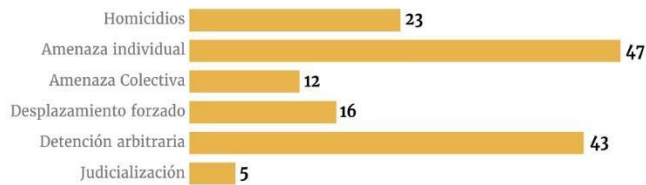
Fuente: (Correa & Jaramillo, 2019)



Anexo 3

Fuente: (Correa & Jaramillo, 2019)

Agresiones contra líderes y lideresas sociales entre enero y octubre de 2020, según el Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Antioquia

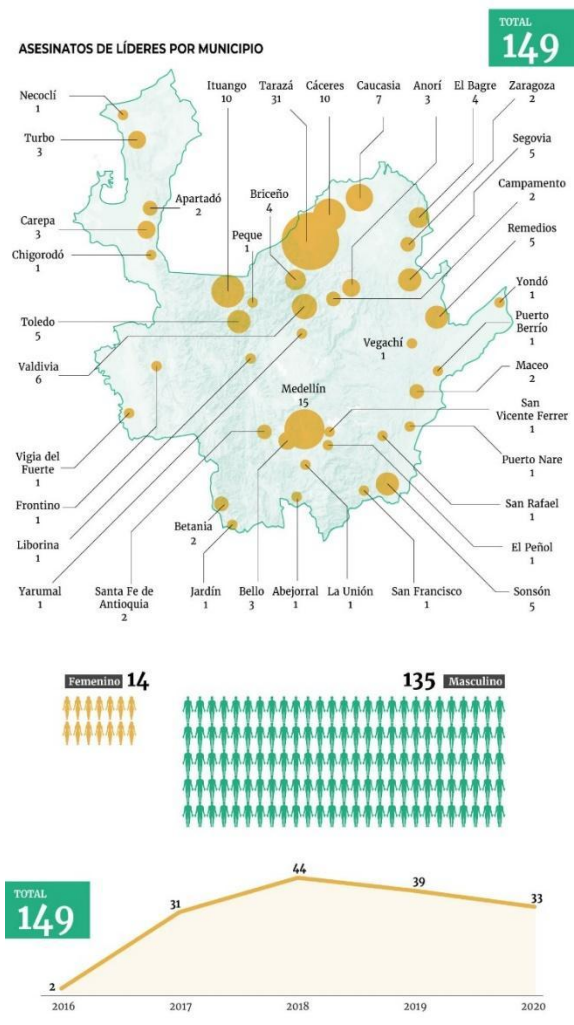


De acuerdo con el Programa Somos Defensores, entre enero y septiembre de 2020, fueron asesinados 135 líderes y lideresas sociales en Colombia.

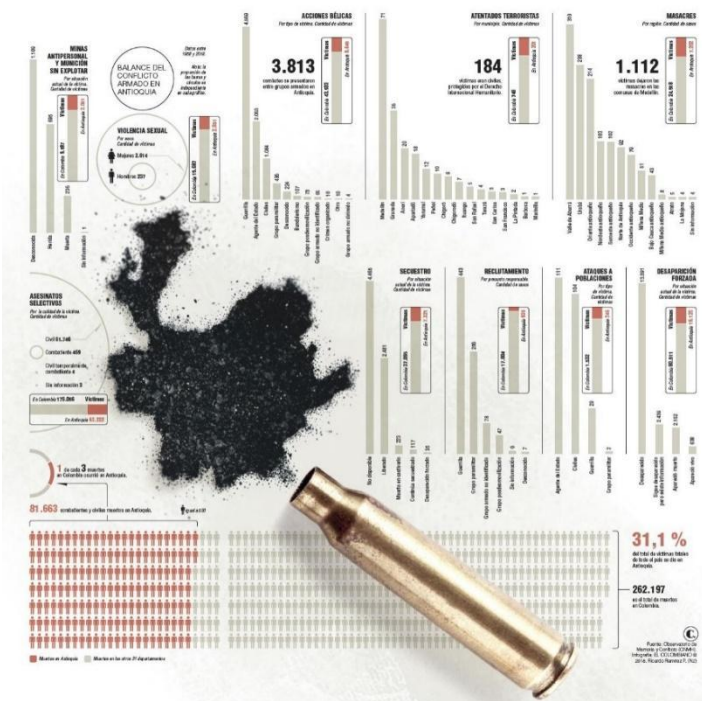
Según Indepaz, entre enero y noviembre de 2020, Antioquia fue el departamento que presentó la mayor cantidad de masacres en el país: 18 de 77.

Anexo 4

Fuente: (Correa & Jaramillo, 2019)



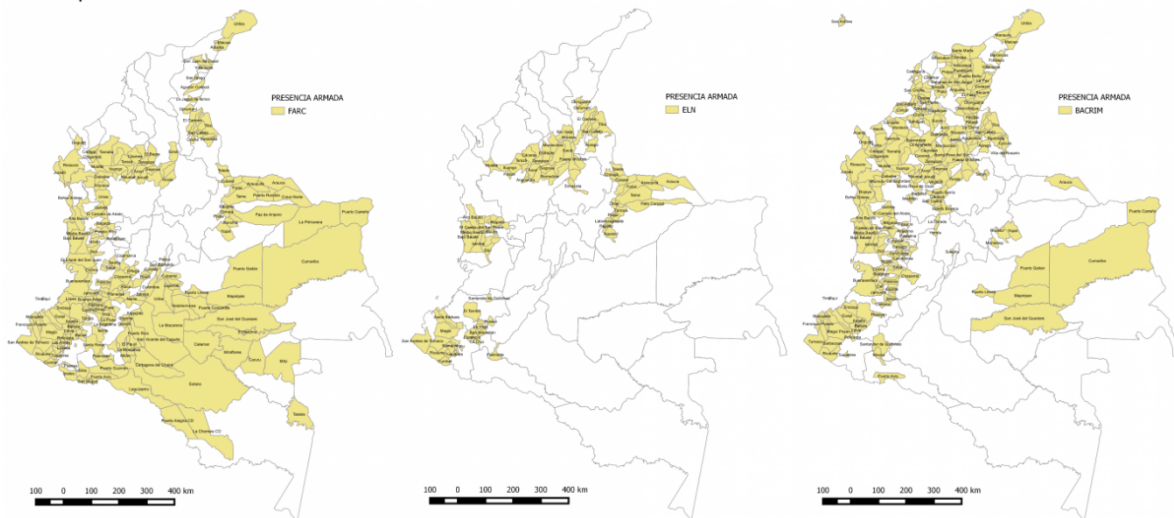
Fuente: (Marulanda, 2018)



Anexo 6

Fuente: (PARES, 2015)

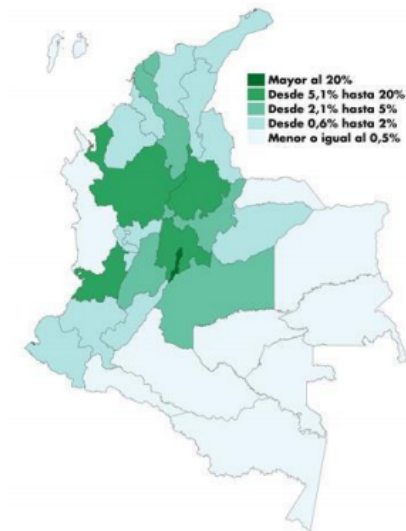
Los mapas del conflicto



Anexo 7

Fuente: (DANE, 2021)

Gráfico 1. Producto Interno Bruto por departamentos
Participación porcentual a precios corrientes
2020^{pr}

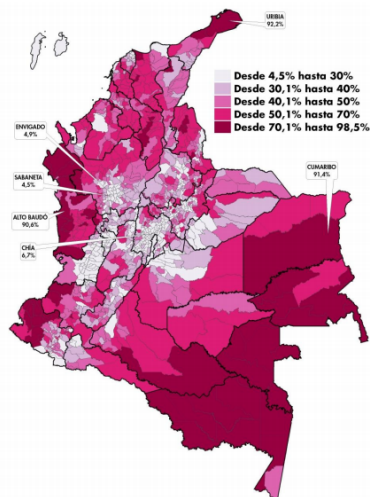


Fuente: DANE, Cuentas nacionales.

Anexo 8

Fuente: (DANE, 2020)

Gráfico 1. Incidencia de la pobreza multidimensional municipal con fuente censal (porcentaje)
Total municipal
Año 2018



Fuente: DANE, CNPV 2018.

Anexo 9

Fuente: (GIRALDO, 2020)

